



I LEGISLATURA

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA



Ciudad de México, 6 de febrero de 2020
Oficio No. DYAZ/19/2020.

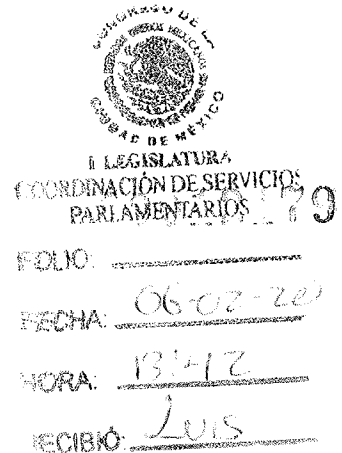
Dip. Isabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura
Presente.

La que suscribe Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, punto 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II, 96 y 98, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa por la que se reforma **el artículo 282, apartado B, fracción II, del Código Civil del Distrito Federal**, para que se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria, que tendrá lugar el martes 11 de febrero del presente año.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Dip. Yuriri Ayala Zúñiga



Ciudad de México a 6 de febrero de 2020.

**DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA
P R E S E N T E**

Los que suscriben, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, Diputada Isabela Rosales Herrera, Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, Diputada Leticia Esther Varela Martínez, Diputada Leticia Estrada Hernández, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, Diputado Ricardo Jesús Fuentes Gómez, Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA y Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI y 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 95 fracción II, 96 y 98, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la **iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 282, aparato B., fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal**, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

La presente iniciativa parte del análisis de la constitucionalidad del contenido normativo del artículo 282, aparato B. fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, partiendo de la consideración de que el mismo vulnera el contenido del interés superior del menor, así como el principio de igualdad y no discriminación contenido el artículo 1º, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, al incluir un trato diferenciado injustificado dentro de una categoría sospechosa.

Así, la iniciativa plantea un ejercicio de control de constitucionalidad, con base en lo previsto en el parámetro de regularidad constitucional, para el efecto de estudiar su validez dentro del sistema jurídico de la Ciudad de México.

II. Motivaciones y argumentos que la sustentan

A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, la protección de los derechos fundamentales cambió rotundamente, alcanzando al efecto la salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con base en el contenido normativo que ofrece el principio del interés superior del menor.

Dicho principio, de orden constitucional, tiene injerencia directa en la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, considerándolos como sujetos de derechos y libertades, y no solamente como objetos de protección por parte de quien ostenta su guarda y custodia.

Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:¹

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus

¹ Visible en la página 1398 del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores.”

Por su parte, el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes”.

Por tanto, cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales”.

El Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad **8/2014**, sostuvo que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida.

De ahí que todas las autoridades deban asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos fundamentales, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:²

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. De la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS." (1), deriva que el interés superior del menor es un principio vinculante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, cuya aplicación se proyecta en tres dimensiones: a) como derecho sustantivo, en cuanto a que el interés referido sea consideración primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto a una cuestión debatida; b) como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la que satisfaga de forma más efectiva sus derechos y libertades, a la luz del interés superior del menor; y, c) como norma de procedimiento, conforme a la cual, siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, deberá incluirse en el proceso de decisión, una estimación de las posibles repercusiones en ellos. Asimismo, la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se consideró el interés superior del menor en el análisis de las diversas alternativas posibles.”

En ese contexto, la presente iniciativa busca redimensionar el principio del interés superior del menor y, a su vez, establecer cuáles son las bases jurisdiccionales para que los juzgados de lo familiar de esta Ciudad, determinen quien de los dos padres de los menores debe ejercer la guarda y custodia, conforme a los aspectos procesales de carácter jurisdiccional que dicho principio establece.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:³

² Visible en la página 256 del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

³ Visible en la página 236 del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. OBLIGACIONES QUE, PARA SU PROTECCIÓN, DERIVAN PARA EL ESTADO MEXICANO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en observancia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que la obligación del Estado de proteger el interés superior de los menores durante cualquier procedimiento en el cual estén involucrados implica, entre otras cuestiones, los siguientes débitos: (I) suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; (II) asegurar, especialmente en los casos en que hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u otras formas de maltrato, que su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado; y, (III) procurar que no sean interrogados en más ocasiones que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, su revictimización o un impacto traumático.”

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad

Es necesario realizar un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad para verificar que la iniciativa que se propone no presente vicios de esa naturaleza. Sin perder de vista que la propuesta toma en consideración lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión **331/2018**, de su índice.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada del Tribunal Pleno, cuyo texto y rubro indican:⁴

“CONTROL PREVIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE PROYECTOS DE LEY APROBADOS POR LA LEGISLATURA LOCAL. SU ESTABLECIMIENTO NO AFECTA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. Es válido que los Estados de la Federación establezcan medios de control para garantizar la supremacía constitucional mediante el contraste jurisdiccional entre una norma ordinaria y la Constitución local, ya sea que se

⁴ Visible en la página 714 del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

ejercite de manera correctiva, como sucede en la acción de inconstitucionalidad, o preventiva, como ocurre en el control previo de la constitucionalidad de proyectos de ley aprobados por la Legislatura Local, antes de su promulgación y publicación, sin que ello afecte el principio de división de poderes.”

Al efecto, el contenido del artículo 282, aparato B. fracción II, del Código Civil del Distrito Federal, dispone:

“Artículo 282.

B. Una vez contestada la solicitud:

(...)

II.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio.

En defecto de ese acuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad.

Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.

(...)”

En esencia, dicho artículo establece que en los juicios de divorcio, la guarda y custodia provisional debe otorgarse de manera automática a la madre, siempre que los hijos fueran menores de doce años.

Respecto de su análisis de constitucionalidad, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, sostuvo que no era sostenible una interpretación conforme de dicho artículo dado que **vulneraba el principio de igualdad y no discriminación**, encuadrando en una categoría sospechosa por razón de género. Lo conducente, tomando en cuenta que las normas que resulten discriminatorias no gozan del principio de constitucionalidad, por lo que es materialmente imposible realizar un

ejercicio de adecuación, ya sea en sentido amplio o estricto a través de la interpretación conforme, como ejercicio hermenéutico.

Sobre el particular, la propia Primera Sala ha indicado que cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminatoria y contraria al artículo 1° constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en categorías sospechosas. Estas obligaciones no pueden cumplirse mediante una interpretación que varíe la base misma del concepto impugnado y que no modifique la situación discriminatoria sufrida por dichas personas.

Por lo que, se concluye, apoyados en las consideraciones de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión **331/2018**, que el artículo 282, aparato B. fracción II, del Código Civil del Distrito Federal, es inconstitucional al vulnerar el contenido del artículo 1°, quinto párrafo de la Constitución General, respecto del contenido normativo del principio de igualdad y no discriminación.

Es aplicable a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala, cuyo texto y rubro indican:⁵

“NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME. Cuando una norma es discriminatoria no puede realizarse una interpretación conforme, pues la existencia jurídica de su redacción continuará siendo aplicable, pese a ser discriminatoria y contraria al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las obligaciones internacionales contraídas por México. Es decir, si del contenido literal de la

⁵ Visible en la página 1394 del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

norma analizada se obtiene un trato discriminatorio y, por tanto, su contenido es contrario al precepto indicado, entonces debe declararse inconstitucional por el órgano de amparo, ya que la interpretación conforme no repara el trato diferenciado generado, pues lo que se busca es suprimir la discriminación generada por la norma, cesando su constante afectación y la inclusión expresa en el régimen jurídico en cuestión. Además, realizar una interpretación conforme implicaría que el órgano de control constitucional ignore o desconozca que el legislador incumplió con la obligación positiva de configurar los textos legales evitando cualquier forma de discriminación, ya sea en su lectura o en su aplicación y, además, privilegiar una intelección de los preceptos que permita la subsistencia de un texto normativo discriminatorio.”

Por otra parte, la Primera Sala también determinó que el artículo del Código Civil local violenta el principio del interés superior del menor, ya que desplaza la función del juzgador consistente en evaluar las circunstancias particulares de cada caso en concreto para determinar quién es la persona que mejor puede atender las necesidades afectivas y de cuidado del infante.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:⁶

“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar

⁶ Visible en la página 270 del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional.”.

Toda vez que el interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales, en términos de lo previsto en el noveno párrafo del artículo 4° de la Constitución General.⁷ De ahí que, los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano

⁷ “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

deben, en todos los casos, atender a dicho principio y ponderar por su vigencia en el ámbito del derecho familiar, tomando en consideración el mejor cuidado de los menores y la protección sistemática de sus derechos, principios y libertades, tratándose de decisiones que les involucre, como lo es la guarda y custodia.

Finalmente, la Primera Sala también aseveró que la presunción en favor de la madre que establecía la norma controvertida no sólo reafirmaba estereotipos de género tradicionales, sino que profundiza el rol de mujer-madre e impide erradicar la concepción de la feminidad tradicional.

Lo anterior, vulnera el contenido de los artículos 1º, quinto párrafo, y 4º, ambos de la Constitución General, así como del diverso 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos indica que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

En tal virtud, atento al contenido del artículo 12 de la Convención de los Derechos del niño, que dispone:

“Artículo 12.

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.”⁸

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

⁸ **“INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA INVOLUCRA UNA VALORACIÓN DE PARTE**

En las determinaciones judiciales relacionadas con menores, como es el caso, la relativo a la guarda y custodia el Juez debe atender el contenido del principio del interés superior del menor, desde el ámbito jurisdiccional, el cual se presenta como principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un menor en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Por tanto debe, en todos los casos, ponderar el interés superior del menor, advirtiendo que reciba una protección integral de sus derechos fundamentales, pudiendo este manifestar su opinión sobre la guarda y custodia, misma que tendrá que ser tomada en cuenta al momento de emitir la resolución respectiva.

DEL JUEZ. El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de los menores de edad a participar efectivamente en los procedimientos jurisdiccionales que los afectan y a dar su opinión de tal modo que pueda tener influencia en el contexto de la toma de decisión judicial que resuelva sobre su vida y sus derechos. Sin embargo, su participación no constituye una regla irrestricta, pues asumir tal rigidez implicaría dejar de lado las condiciones específicas que rodean a los niños en casos particulares, lo que podría ir en detrimento de su interés superior. En este sentido, tanto al evaluar de oficio la participación de los menores de edad como al analizar la conveniencia de la admisión de su declaración o testimonio ofertada por las partes, el juez debe evitar la práctica desmedida o desconsiderada del derecho, lo que podría acontecer si sus derechos no forman parte de la litis del asunto, si el menor ha manifestado su deseo de no intervenir o hacerlo a través de sus representantes, si se pretende entrevistarlos más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. Ahora bien, esta sujeción a valoración judicial de la participación de los menores de edad en los procedimientos jurisdiccionales no debe ser jamás leída como una barrera de entrada, sino como el mecanismo que da cauce a su derecho. La premisa para el juzgador debe ser procurar el mayor acceso del niño, en la medida de lo posible, al examen de su propio caso. Por ende, la excepción debe estar debidamente fundada y motivada, previendo que dicha decisión puede ser impugnada y remitida a un nuevo examen jurídico por los tribunales de alzada y los jueces de amparo.”. Visible en la página 383 del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de la Primera Sala, cuyo texto y rubro indican:⁹

“DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A EXPRESAR SU OPINIÓN. ASPECTOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA Y PONDERAR POR PARTE DE LAS Y LOS JUZGADORES. Esta Sala ha expresado que los jueces y juezas deben ser cuidadosos al valorar tanto la opinión de los niños y niñas, como el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos que afectan sus derechos. Así pues, al ponderar la opinión de un niño o niña, el juzgador debe tomar en cuenta que los procesos sobre protección de menores son extraordinariamente flexibles; aspecto que de suyo no implica que el interés superior de la infancia sea un principio dispositivo, sino que precisamente el juez o jueza cuenta con un margen amplio para poder tutelar los derechos de los niños y niñas. En consecuencia, debe considerarse que las circunstancias familiares son siempre cambiantes y que la valoración debe llevar a analizar si lo expresado por los menores responde a una voluntad real de cambiar de progenitor custodio y no a la manipulación de uno de ellos derivada del propio conflicto post matrimonial. Es por ello que debe analizarse en conjunto tanto lo expresado por el menor, como las demás circunstancias que se presenten, contextualizando siempre el dicho de la niña o niño; esto es, la opinión del niño o niña no puede tomarse simplemente como un hecho aislado. La finalidad perseguida es que la opinión manifestada, contrastada con las pruebas practicadas y, en su caso, con el dictamen de especialistas, sirva al juez para reforzar su convicción sobre la medida a adoptar.”

IV. Ordenamiento a modificar

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de éste H. Congreso de la Ciudad de México la siguiente **iniciativa por la que se reforma el artículo 282, aparato B., fracción II, del Código Civil del Distrito Federal:**

Texto vigente	Propuesta de reforma
<p>“Artículo 282. B. Una vez contestada la solicitud: (...)”</p>	<p>“Artículo 282. B. Una vez contestada la solicitud: (...)”</p>

⁹ Visible en la página 958 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, del semanario judicial y su gaceta; esto es, durante la Décima Época.

II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio.

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad.

Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.
 (...)"

II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio. **El Juez de lo Familiar deberá, en todos los casos, ponderar por el interés superior del menor, advirtiéndole que reciba una protección integral de sus derechos fundamentales, pudiendo los menores manifestar su opinión sobre la guarda y custodia, misma que tendrá que ser tomada en cuenta al momento de emitir la resolución respectiva.**

En defecto de ese acuerdo; el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la opinión del menor de edad.

Con independencia de quien ostente la guarda y custodia, los menores de edad podrán decidir con la persona con quien quieran vivir, atendiendo a las necesidades afectivas y de cuidado.

~~Los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos.
 (...)"~~

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad de México, esta Iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

DECRETO:

“Artículo 282.

B. Una vez contestada la solicitud:

(...)

II.- Poner a los hijos al cuidado de la persona que de común acuerdo designen los cónyuges, pudiendo estos compartir la guarda y custodia mediante convenio. El **Juez de lo Familiar deberá, en todos los casos, ponderar por el interés superior del menor, advirtiéndole que reciba una protección integral de sus derechos fundamentales, pudiendo los menores manifestar su opinión sobre la guarda y custodia, misma que tendrá que ser tomada en cuenta al momento de emitir la resolución respectiva.**

En defecto de ese acuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá conforme al Título Décimo Sexto del Código de Procedimientos Civiles.

Con independencia de quien ostente la guarda y custodia, los menores de edad podrán decidir con la persona con quien quieran vivir, atendiendo a las necesidades afectivas y de cuidado. (...)”

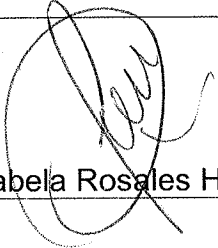


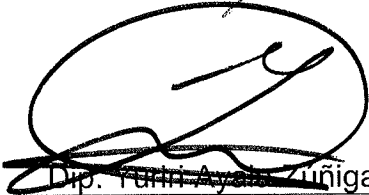
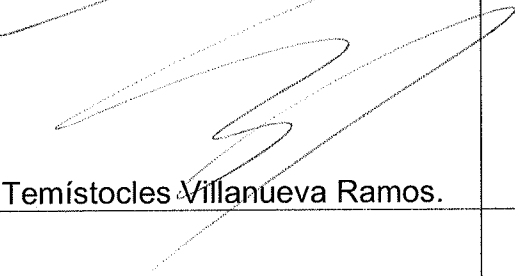
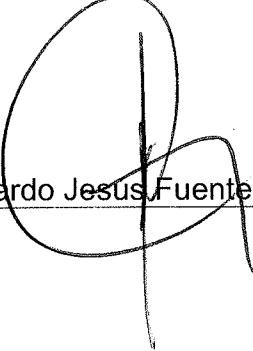






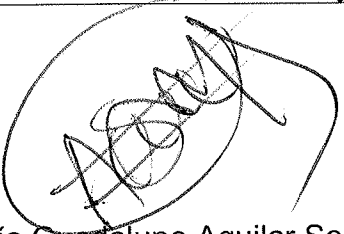
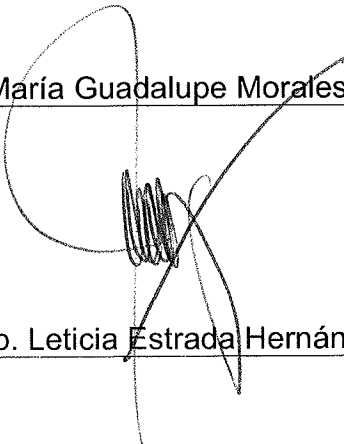
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

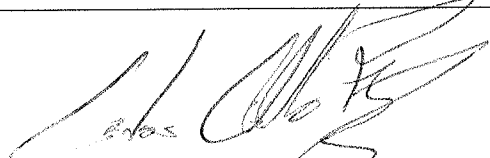
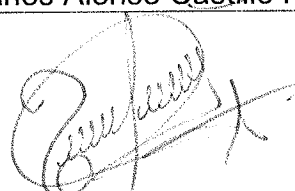
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Atentamente

Nombre y firma

 Dip. Isabela Rosales Herrera.	 Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.
 Dip. Leticia Esther Varela Martínez.	 Dip. Yuri Ayala Zuñiga.
 Dip. Temístocles Villanueva Ramos.	 Dip. Ricardo Jesús Fuentes Gómez.
 Dip. José Emmanuel Vargas Bernal.	 Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín.
 Dip. Esperanza Villalobos Pérez.	 Dip. Leonor Gómez Otegui.
 Dip. María de Lourdes Paz Reyes.	 Dip. María Guadalupe Morales Rubio.
 Dip. María Guadalupe Aguilar Solache.	 Dip. Leticia Estrada Hernández.

 Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez.	Dip. Nazario Norberto Sánchez.
 Dip. Marisela Zúñiga Cerón.	Dip. Ana Cristina Hernández Trejo.